
HISTORIA Y VIOLENCIA EN LA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA

Jorge Iván Marín Taborda*

El pasado 26 de octubre de 1997, día de elecciones municipales y departamentales, algo más de nueve millones de colombianos votaron por la paz. Esta votación masiva es -o parece ser- la culminación de múltiples demostraciones de la sociedad civil y acaso del Estado, en la búsqueda de una paz que resulta esquivada para una nación considerada como la más violenta del hemisferio occidental. Las cifras son contundentes. En la última década se registraron entre 25 y 30 mil muertes violentas al año. La tasa de homicidios del país es de 88 por cien mil habitantes, es decir, la más alta del mundo¹. Además de la situación descrita, y según el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia ostenta el nada honroso quinto lugar en el mundo, como violador de los Derechos Humanos².

Pero, qué circunstancias nos han conducido a esta lamentable situación? Las cau-

sas son múltiples, y en un intento por globalizarlas, siguiendo a los estudiosos y especialistas en el conflicto actual de nuestro país, se pueden señalar cuatro factores principales, sin excluir, naturalmente, sus diversas expresiones y modalidades: primero, la inveterada debilidad del Estado, que se manifiesta en la alta impunidad de la justicia, la crisis institucional y la ilegitimidad política del régimen; segundo, el conflicto armado -enfrentamientos entre las Fuerzas institucionales armadas y la subversión- que abarca ya más de cuatro décadas; tercero, el problema del narcotráfico con sus secuelas permanentes de muerte y corrupción; y, finalmente, los problemas estructurales a nivel social y económico, que se expresan no sólo en los preocupantes niveles de pobreza y marginalidad de amplias capas de la población, especialmente en la sociedad rural, sino en los elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso.

* Profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana.

1 Un interesante estudio que contiene cifras y porcentajes sobre violencia en la última década son los artículos de Mauricio Rubio, *De las riñas a la guerra. Hacia una reformulación del diagnóstico de la violencia colombiana*, y el de Camilo Echandía C., *Dimensión Regional del homicidio en Colombia*. En revista: *Coyuntura Social*, FEDESARROLLO, Instituto SER, noviembre 1997.

2 *El Espectador*, 31 de enero de 1998.

Actualmente, el fenómeno de la violencia viene suscitando toda clase de inquietudes. Para todos, esta problemática se ha convertido en una prioridad que debe ser superada. El punto común, en el cual convergen el gobierno, los sectores políticos, los ciudadanos comunes, los intelectuales y la academia en general, es la necesidad de encontrar caminos para la paz y la convivencia entre los colombianos. Sin embargo, los más optimistas afirman que en nuestro país la paz es solamente un asunto de diálogo y voluntad política; otros, más prudentes, consideran la paz como una necesidad prioritaria, que debe negociarse a partir de un compromiso entre la sociedad civil y los sectores involucrados en el conflicto. Otros, en forma "apocalíptica", consideran que a Colombia le hace falta profundizar más en la crisis y en la guerra para que, una vez maduro el proceso, se encuentre el camino de la reconciliación, preferiblemente con la eliminación y/o definitiva derrota del otro. Lo único cierto es que la dinámica e intensificación del proceso nos permite concluir que hay violencia para rato.

Pero el dilema de la violencia en Colombia no es cuándo empezó y cuándo terminará. No es, como pudiera pensarse con simpleza, un problema de los orígenes y la culminación, sino de su irreductible continuidad y permanencia histórica. Consideramos, entonces, que la violencia en Colombia es un fenómeno social que puede y debe ser abordado históricamente. Como bien lo sostiene Hernando Valencia Villa:

....Colombia, [es] una nación dividida cuya herencia de violencia la obliga a huir hacia adelante, hacia un porvenir que por estar hecho de la misma materia contenciosa que el pasado amenaza con frustrar todas las iniciativas de modernización y reconciliación en clave democrática que surgen de su propia entraña. Y el tiempo presente resultante no puede definirse más que como guerra, guerra

*civil de baja intensidad. [...] Más aún, la atracción gravitacional del conflicto intestino es tan fuerte que la diversidad regional, la vitalidad cultural, la estabilidad macroeconómica y la plasticidad societaria, que son valores objetivos de la vida colectiva al punto que explican la supervivencia e incluso el dinamismo del país, terminan avasalladas por la intolerancia, la barbarie y la impunidad características de la política colombiana contemporánea*³.

Quienes conocen a fondo los procesos de conflicto y violencia en nuestro país, no pueden negar la capacidad y la imaginación de los colombianos para proponer y propender por salidas de paz y reconciliación en nuestra sociedad, inclusive, más allá de la resignación o la simple supervivencia. En otras palabras, no se nos puede acusar de ineptos en la búsqueda de la paz. Pero la historia misma de Colombia, en la terca sucesión de hechos al parecer irremediables, nos condena a padecer el tormento de Sísifo.

Para los colombianos, el pasado es una presencia ineludible. En mucho nuestra visión de la violencia es ahistórica. Sin embargo, nos procuramos deliberadamente una amnesia colectiva de ese oscuro pasado y presente que es la violencia, la cual recreamos constantemente en la práctica e inclusive, la actualizamos insospechadamente en la memoria.

En Colombia la historia es contradictoria y conflictiva, pero, aun así, ella misma debe servirnos de fundamento, de sustancia para cualquier futuro que busquemos construir. De ahí que la voluntad de romper con el problema endémico de la violencia deba incluir, necesariamente, la civilización de los conflictos y la búsqueda de alternativas para una paz duradera y generosa.

En el presente ensayo pretendemos exponer en forma sintética un marco de refe-

3 Hernando Valencia-Villa, *Entre la barbarie y la retórica: los derechos humanos en Colombia*. En revista: *El Viejo Topo*, No. 94, Barcelona, marzo 1996.

rencia histórico sobre la violencia en Colombia; en la primera parte se establece la relación existente entre guerra, política y violencia; en la segunda, se presenta un itinerario histórico de la violencia con sus continuidades y sus rupturas; y por último, se plantea una breve perspectiva de la violencia actual que azota la sociedad colombiana.

EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA Y LA PRÁCTICA DE LA GUERRA

Los estudios que sobre la violencia se han realizado en los últimos quince años permiten concluir que existe una relación de continuidad entre el denominado periodo "clásico" de la Violencia -1945 y 1965- y las guerras civiles que fueron tan frecuentes a lo largo del siglo XIX.

Un rasgo en común que permite llegar a esta afirmación, es la connotación política de los conflictos colombianos a lo largo de los 180 años de vida republicana, conflictos que muchas veces derivan en problemas sociales de criminalidad y bandidaje, pero que de alguna manera conservan su relación entre lo político y la competencia por el poder del Estado, lo cual no excluye, ni mucho menos, móviles socioeconómicos o culturales.

Hoy en día no resulta descabellado aceptar la tesis de la larga duración del conflicto colombiano en la sociedad y en la política, por su permanencia y continuidad. Una importantísima demostración de dicha tesis la realiza el historiador Gonzalo Sánchez al concluir cómo, durante las guerras civiles del siglo XIX, existía una relación de conti-

nuidad y complementariedad entre guerra y política. En el siglo XX, durante el periodo de la Violencia bipartidista de los cincuenta y la primera mitad de los sesenta, la guerra se despliega como una estrategia de exclusión, de supresión de lo político; con el surgimiento de las guerrillas y en el momento actual, el conflicto se caracteriza por su fragmentación y diversificación, tanto de la guerra como de la política. Argumentos que ratifican la necesidad ineludible de consultar la historia⁴.

Otro aspecto interesante de resaltar es la relación entre guerra y orden constitucional. En el siglo pasado "la guerra se comporta como fundadora del Derecho, del orden jurídico-político, de una nueva institucionalidad, y no como fuente de anarquía"⁵. Inclusive, la Constitución más consistente y duradera para los colombianos, la Constitución del 86, se dio como resultado de la guerra civil del 85 y se impuso sobre los liberales derrotados.

En tiempos mas recientes, paradójicamente, la historia vuelve a repetirse. El recién posesionado gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) convocó a elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, el 9 de diciembre de 1990. Una hora antes de abrirse las urnas para ejercer el derecho democrático del voto, las Fuerzas Armadas desplegaron una gran ofensiva, en la que no faltaron los bombardeos, contra las bases de la guerrilla más grande del país, las FARC. Esto contradecía la voluntad empeñada por muchos colombianos de que esta nueva constitución debería servir como un nuevo pacto de paz. Lo que estos hechos no contradecía era la constante histórica de guerra y política. El resultado, la Constitu-

4 La tesis sobre la estrecha relación entre Guerra y Política es del historiador Gonzalo Sánchez. *Guerra y Política en la sociedad colombiana*. En: revista: *Análisis Político* No. 11, de septiembrediciembre de 1990, Universidad Nacional, Bogotá, 1990. Con respecto a la relación entre Guerras civiles del siglo XIX y las Constituciones, ver: Hernando Valencia Villa, *Cartas de batalla, una crítica del constitucionalismo colombiano*. Universidad Nacional, CEREC, Bogotá, 1987.

5 Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*. Especialmente p.p. 8 - 12.

ción de 1991 no consiguió uno de sus principales objetivos: la paz y la convivencia⁶.

Los sucesos del 9 de diciembre de 1990 demostraron una vez más en la práctica, como lo sostiene Valencia Villa (1987), para otros y estos tiempos históricos, que "...cada una de las constituciones del siglo XIX fue la consecuencia de una guerra y la causa de otra. Cada una de las reformas del siglo XX ha sido la consecuencia de un conflicto y la causa de otro"⁷. No obstante, han sucedido cambios entre un siglo y el otro. En el siglo XIX, la proliferación de guerras civiles dio paso en el siglo XX a los conflictos hoy denominado como la Violencia. Pero, qué ha cambiado sustancialmente de uno al otro?

El historiador británico Malcom Deas establece una distinción tajante entre las guerras civiles del siglo pasado y lo que se ha denominado la Violencia en el presente. Para él, las diferencias se encuentran tanto en la condición de clase de quienes ejercían la dirección de las fuerzas en conflicto en uno y otro momento, y su composición social, como también, los alcances de los planes, estrategias, batallas, costos económicos y la corta duración de las guerras civiles decimonónicas, frente a las dos décadas de duración de la Violencia⁸. No obstante, considero que estas argumentaciones, no desvirtúan del todo una idea aceptada entre algunos historiadores, de que la Violencia del periodo 1945-1965, que ocasionó algo más de 200 mil muertes, fue una "guerra civil no declarada"⁹.

LA RECIPROCIDAD ENTRE GUERRA Y VIOLENCIA

Pero, por qué la Violencia del presente difiere de las guerras civiles del pasado?. Siguiendo a Peter Waldmann, es posible aceptar "que la guerra puede ser motor de innovaciones sociales, técnicas y organizativas. La violencia, por el contrario, en cuanto medio de poder en los conflictos y sistemas de control intrasociales, es considerada como estéril y de eficacia sólo limitada. Se le atribuye en primer lugar un efecto negativo, se supone que podría cuanto más influir la conducta externa, pero se le niega toda fuerza configuradora respecto de la mentalidad y de las estructuras de una sociedad"¹⁰. En la historia actual de Colombia abundan los ejemplos que confirman estas aseveraciones, sobre todo lo estéril de la violencia y sus efectos negativos.

Para muchos colombianos, el periodo de la Violencia "clásica" (1945-1965) aún se conserva en la memoria como aquella época de caos que azotó los campos colombianos; cuando se diseminó el terror y las desgracias que afectaron a miles de familias. Como bien lo recoge Gonzalo Sánchez, la Violencia es "esa mezcla de anarquía, de insurgencia campesina y de terror oficial en la cual sería inútil tratar de establecer cuál de sus componentes juega el papel dominante..." pero en este país diverso y regionalizado, la violencia tuvo diferentes connotaciones; en algunas zonas en donde los campesinos alcanzaron interesantes niveles de or-

6 La Constitución de 1991 fue además, el resultado de los procesos de paz firmado entre el M-19 y el gobierno colombiano, en 1990.

7 Hernando Valencia Villa. *Cartas de Batalla*. p.149.

8 El autor establece un interesante paralelo en varios aspectos sobre las guerras del siglo XIX y la Violencia. Ver: Malcom Deas, *Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia*. En: *Pasado y Presente de la Violencia en Colombia*. Gonzalo Sánchez, Ricardo Peñaranda. Bogotá, 1986.

9 Existe un amplio análisis en: Gonzalo Sánchez, *Los estudios sobre la Violencia: Balance y Perspectivas*. En: *Pasado y presente de la Violencia*. 1986.

10 Peter Waldmann, *La insospechada fecundidad de la violencia*. En: *Revista Colombiana de Psicología*, Universidad Nacional, Bogotá, 1993.

ganización, esta fue denominada como “la Revolución”. En otras, se le dio a “La Violencia” un “carácter de Gran Sujeto Histórico, trascendente, exterior a los actores del conflicto, y que como tal, (...), permite despersonalizar las responsabilidades. El fatalismo de expresiones tales como “La Violencia me mató la familia... La Violencia me quitó la tierra” parecen sugerir la resignada aceptación de los efectos de un proceso social y político como si se tratara simplemente de un orden natural (o sobrenatural?) de las cosas”. Otro aspecto para tener en cuenta es que para el “lenguaje oficial, el vocablo cumple una función ideológica particular: ocultar el contenido social o los efectos de clase de la crisis política”. En síntesis, como lo sostiene Gonzalo Sánchez, “la Violencia se proyecta casi exclusivamente como tragedia y como fuerza impersonal y destructora”¹¹. Para los sectores populares urbanos y campesinos, la Violencia no fue más que una gran derrota y una tragedia.

Muchos de estos elementos de definición de lo que fue la denominada Violencia ‘clásica’ se conservan en lo que hoy se llama violencia o las violencias. Nuestra violencia de todos los días aparece aun indevelable, indescifrable; se fragmenta y diversifica en sus múltiples manifestaciones y en ella se conjugan y confluyen las dos grandes tesis enfrentadas que la definen en su origen. Según la primera, la violencia “es inherente a la naturaleza humana”; de acuerdo a la segunda, “procede de la vida social y de sus apremios”¹².

En Colombia, la violencia es un síntoma permanente de la crisis y del malestar

social que atraviesa todos los ámbitos de la vida. La gente no alcanza a procesar un hecho cuando sucede otro igual o peor; esto ha generado en amplias zonas del país problemas de desarraigo e incertidumbre. Sin embargo, todos los actores sociales recurren permanentemente a ella. Podríamos adherirnos a la afirmación de Manuel Bridier: “la necesidad de la violencia se confunde fácilmente con el gusto por la violencia”¹³. Pero en general, es posible concluir que aún existen elementos que requieren ser dilucidados en el complejo fenómeno de nuestra violencia, sobre todo, que nos permitan explorar y comprender los aspectos culturales y psicosociales que subyacen a la Violencia y al conflicto colombiano. Un importante avance en este sentido, lo logra el ensayo de Myriam Jimeno¹⁴, quien concluye que la violencia en Colombia no es un asunto de identidad nacional, o en otras palabras, que no se puede aceptar como cierto que en nuestro país existe una cultura de la violencia.

LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA

A lo largo del siglo XIX se sucedieron alrededor de 7 guerras civiles generales y cerca de veinte estallidos de violencia local; estas confrontaciones entre liberales y conservadores en competencia por el control del Estado se convirtieron en escenario privilegiado de la acción política. La tendencia hegemónica y excluyente del partido en el gobierno era por lo general la causa, pero también el efecto del conflicto. Y aunque no fueron el único medio, allí los partidos tradicionales definieron sus mecanismos de

-
- 11 Gonzalo Sánchez, *Los estudios sobre la Violencia: Balance y ...*, p. 14 - 28. En: *Pasado y Presente de la Violencia...*, 1986.
 - 12 Louis-Marie Morfaux. *Diccionario de Ciencias Humanas*. Grijalbo, Barcelona, 1985.
 - 13 Manuel Bridier, *Crítica del «Terrorismo Revolucionario»* En: *Revista El Viejo Topo*, Extra No. 3, Madrid, s.f.
 - 14 Myriam Jimeno, *Identidad y experiencias cotidianas de violencia*. En: *Revista Análisis Político*, No. 33, Universidad Nacional, Bogotá, 1998.

socialización política, su pertenencia partidista y construyeron su identidad. En cierta forma los partidos se fueron transformando en dos *subculturas* políticas contrapuestas; se nació liberal o conservador¹⁵.

Durante la segunda mitad del siglo XIX los partidos tradicionales se habían consolidado como tendencias políticas claramente definidas. En los años 50 y 60 el liberalismo decimonónico logró imponer su proyecto político y económico en la Constitución federalista de 1863; las dos décadas siguientes estarían marcadas por el comportamiento hegemónico de los liberales radicales en el poder, lo que precipitó la guerra civil del 85. Como consecuencia de la crisis política y por el agotamiento del modelo agroexportador, se fortalece en el poder la denominada *Regeneración*, una alianza entre un grupo reducido de liberales críticos de la ortodoxia liberal decimonónica y de importantes sectores conservadores, quienes después de la guerra civil del 85 redactaron la Constitución de 1886.

La Constitución del 86 le daría un vuelco total al anterior orden institucional. En la nueva Constitución se plantea un proyecto claro de unificación nacional, con un fuerte contenido centralista y presidencialista, que por lo mismo termina siendo un proyecto hegemónico, del cual se resalta su carácter autoritario, que sin embargo, no consigue disuadir del uso de las armas a los liberales excluidos del poder¹⁶. Por el contrario, las convicciones ideológicas y los in-

tereses económicos de diversos grupos liberales se ven inclinados a recurrir a la revuelta. Es así como antes de terminar el siglo se presenta la breve guerra civil del 95 y posteriormente, en octubre de 1899 como consecuencia de la intransigencia política y la crisis económica y cafetera, estalla la conflagración civil más grande del siglo XIX, y la primera del presente, que se conoce con el nombre de la Guerra de los Mil Días¹⁷.

Además de la destrucción material y de las cuantiosas pérdidas humanas, la Guerra de los Mil Días se caracterizó por los excesos que se cometieron en los enfrentamientos; en muchos casos, la guerra derivó en actos de ferocidad y barbarie de lado y lado; las dos fuerzas utilizaron grupos de macheteros que se destacaron por su crueldad. De otra parte, las fuerzas liberales por efecto de su dispersión se vieron empujadas a utilizar tácticas guerrilleras que basaban su accionar en la astucia y la sorpresa, y que además sirvieron para prolongar el conflicto.

Al finalizar la guerra en noviembre de 1902, los resultados eran desastrosos; la brutalidad de los enfrentamientos había hecho manifiesto un profundo odio entre liberales y conservadores; algunos inclusive, utilizaron la denominación de "odios heredados" para referirse a los horrores de la violencia; para muchos dirigentes políticos y algunos analistas, estos odios y los deseos de venganza latentes resurgieron dramáticamente durante la violencia de los años cuarenta y cincuenta. Sin embargo, no

-
- 15 La denominación de los partidos políticos tradicionales colombianos como *subculturas* es de Daniel Pécaut, *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*, dos volúmenes, Bogotá, 1987. Para ampliar sobre las relaciones partidos políticos e identidad partidista en Colombia, consultar: Fernán González, *Aproximaciones a la Configuración política de Colombia*. En: Revista *Controversia* Nos. 153-154, vol. II, CINEP, Bogotá, 1989.
 - 16 El periodo que va de 1886 a 1930, ha sido denominado en la historia de Colombia como la "hegemonía conservadora". Aunque los conservadores controlaron el gobierno por casi medio siglo, durante algunos momentos contaron con la colaboración de algunos liberales. El ejemplo más interesante lo constituye la presidencia de Rafael Reyes, 1904-1909.
 - 17 Para consultar sobre la guerra de los Mil Días, ver: Charles W. Bergquist, *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910, la guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias*. FAES, Medellín, 1981. También, Carlos Eduardo Jaramillo, *La Guerra de los Mil Días, 1899-1902*. En: *Nueva Historia de Colombia*, Tomo I, Editorial PLANETA, Bogotá, 1989.

se puede establecer de manera directa la continuidad de estos procesos; la Violencia que va de 1945 a 1965 surge en un contexto histórico diferente, como veremos más adelante.

Pero como lo recuerda Gonzalo Sánchez sobre el fenómeno de la violencia, además de señalar las continuidades es necesario, también apuntar sus discontinuidades. Si existe un periodo en el cual se hace evidente esa discontinuidad, es después de la firma de paz de la Guerra de los Mil Días y de la pérdida de Panamá a finales de 1903. Durante cuatro décadas Colombia vive un periodo de relativa paz y estabilidad política.

No obstante, hubo esporádicos hechos de violencia, entre los cuales podemos mencionar dos: en primer lugar, la represión desatada por los gobiernos de la hegemonía conservadora en la segunda mitad de los años veinte contra el movimiento sindical y las clases subalternas; las vías de hecho para sofocar las huelgas y protestas, concluyeron a fines de 1928 con la masacre de las bananeras que le costo la vida a cerca de 2000 trabajadores. En segundo lugar, la transición política en 1930, de los gobiernos conservadores que habían permanecido en el poder prácticamente durante medio siglo, a manos de los liberales.

En 1930 el candidato liberal Enrique Olaya Herrera derrotó en las elecciones a los dos candidatos conservadores. Además de la división, la caída del conservatismo era también el resultado del manejo excesivamente represivo de las protestas sociales de obreros y campesinos, y de la recesión económica generada por la crisis mundial del capitalismo del año 29. Pero la transición de la hegemonía conservadora al gobierno liberal no fue pacífica, aunque algunos minimizan los brotes de violencia. Lo

cierto es que en algunas regiones, como los Santanderes y Boyacá, se vieron envueltos en confrontaciones que hicieron temer por el estallido de una guerra civil. En estas regiones, el sectarismo y la venganza entre conservadores y liberales generaron hechos de violencia que solo perdieron intensidad en septiembre de 1932, cuando los colombianos se unieron para enfrentar un enemigo externo: la guerra contra el Perú¹⁸.

DEL REFORMISMO A LA VIOLENCIA

El derrumbe de la Hegemonía Conservadora dio paso a la República Liberal que durará 16 años (1930-1946). El ascenso del liberalismo se caracterizara por su reformismo, especialmente, durante el gobierno de la "Revolución en Marcha" de Alfonso López Pumarejo (1934-1938). El reformismo liberal era consecuente con el nuevo contexto económico y social surgido a partir de los años veinte. Por entonces el país se encontraba mejor articulado a la economía mundial a través de las exportaciones cafeteras, la inversión extranjera y el acceso al mercado de capitales. Se dieron también, condiciones internas que permitieron dinamizar los procesos de industrialización y urbanización, lo que generó el surgimiento de nuevas clases sociales.

En la década de los treinta hicieron su aparición en el escenario nuevas fuerzas políticas y sociales que se aglutinaron en organizaciones agrarias y sindicales, entre las que se destaca el Partido Comunista y la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) de Jorge Eliécer Gaitán. Otro aspecto no menos importante en el periodo, fue el arribo de nuevas corrientes ideológicas de izquierda y de derecha que influyeron tanto a los sectores de la elite, como

18 Algunas descripciones sobre la violencia de este periodo, se encuentran en, Mario Latorre Rueda, *1930-1934. Olaya Herrera: un nuevo régimen*. En: *Nueva Historia de Colombia*, Tomo I, Bogotá, 1989.

a las clases populares urbanas y rurales. Todo esto contribuyó a agitar el ambiente político.

Uno de los hechos más relevantes del periodo es la Reforma Constitucional de 1936, impulsada por el gobierno de López Pumarejo, que pretendió adecuar el Estado a las nuevas exigencias de los tiempos. Entre las reformas, cabe resaltar el carácter de función social que se le asignó a la propiedad y la limitación de privilegios que tradicionalmente tenía la iglesia, sobre todo en el campo de la educación; además, quién le fijó al gobierno parámetros de intervención y regulación económica. Paralelamente, el gobierno de la Revolución en Marcha impulsa la Reforma Agraria y laboral. Estos cambios fueron considerados excesivos por los sectores más recalcitrantes y atrasados de la élite que vieron en las reformas liberales un verdadero peligro para sus intereses¹⁹. Estas reformas, que han sido calificadas como los intentos más importantes de modernización en el país, quedarían a medio camino, y en muchos casos fueron una frustración para las clases subalternas que no vieron colmadas sus expectativas. Para los campesinos la situación resultó más dramática: el fracaso de la Reforma Agraria liquidaba la esperanza de solucionar los conflictos por la tierra y aplazaba indefinidamente los problemas del agro colombiano.

Las transformaciones sociales y políticas, así como la crisis económica de la primera mitad de los años treinta, exigieron del Estado un intervencionismo más activo en la economía y la sociedad. Con el propósito de superar las crisis y las sucesivas recesiones de los años treinta y las consecuen-

cias de la segunda Guerra Mundial, se impuso la necesidad de establecer instrumentos y mecanismos de intervención macroeconómica y de regulación de la actividad cafetera²⁰. La forma como los gobiernos liberales atendieron las sucesivas crisis nos permite comprender que el Estado conservaba un papel muy importante en la estabilidad social y económica del país. Lo cual no contradice, sin embargo, el hecho de que el Estado institucional colombiano y su unidad nacional fueran aun débiles. Debemos advertir que usualmente se ha considerado que tanto el Estado colombiano como su unidad nacional han sido precarios.

En los años treinta y cuarenta, Colombia está viviendo un destacado proceso de integración nacional como resultado de la consolidación del capitalismo, sin embargo, el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones que vincule las diferentes regiones del país y la cohesión social, aún se encuentran en una etapa incipiente. Por lo tanto, consideramos este periodo como de transición a un Estado fuerte y moderno, proceso que quedó truncado por efecto de la violencia política a partir de la segunda mitad de los años cuarenta²¹.

Después de los fracasos del segundo gobierno de López Pumarejo (1942-1945), debido a los escándalos de corrupción, es designado Lleras Camargo para terminar el periodo presidencial hasta 1946. Durante este gobierno se desata una persecución contra el movimiento sindical, a la que se considera como el inicio de la violencia. Además, la corrupción y lo que algunos señalaran como la división del liberalismo entre la candidatura oficialista de Gabriel

19 Alvaro Tirado Mejía, *López Pumarejo: la Revolución en Marcha*. En: *Nueva Historia de Colombia*, Historia Política 1886-1946, Tomo I, Bogotá, 1989.

20 Sobre los cambios económicos del periodo consultar, José Antonio Ocampo, *Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945)*. En: *Historia Económica de Colombia*, Siglo XXI editores, FEDESARROLLO, Bogotá, 1987.

21 Sobre el proceso de desarrollo capitalista y de modernización del Estado, ver: Consuelo Corredor Martínez, *Los límites de la modernización*, Editado por CINEP, Universidad Nacional, Bogotá, 1992.

Turbay y la disidente de Jorge Eliécer Gaitán contribuyen a la derrota del liberalismo. Finalmente, el triunfo en las elecciones de 1946 le corresponde al candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Para el Gaitánismo las elecciones no fueron más que un peldaño en el camino hacia el poder.

Indudablemente el hecho mas destacado en materia política durante la primera mitad del siglo XX lo constituye sin lugar a dudas la irrupción del movimiento gaitanista. Aunque el nombre de Jorge Eliécer Gaitán figura ya en el escenario político un par de décadas antes, es a partir de la segunda mitad de los años cuarenta cuando el gaitanismo emerge como un movimiento autónomo en la vida política del país. El ascenso del gaitanismo desenmascara las oligarquías liberales y conservadoras e introduce al pueblo en el debate político nacional, especialmente a las masas urbanas. En síntesis lo que hace Gaitán es meterle pueblo a la democracia colombiana. Ese pueblo al que la élite nacional mira con desprecio y temor, o como dice Catherine LeGrand refiriéndose a Pécaut y Braun, ellos "están fascinados con el miedo intenso, y aparentemente irracional, expresado por las clases altas hacia los pobres a finales de los cuarenta"²².

Si bien Gaitán no fundamenta su brega social y política en la lucha de clases, su posición antioligarquica y su compromiso al lado de los intereses de los sectores populares lo erigen como un líder de nuevo cuño que introduce prácticas políticas novedosas, y recurre como ningún otro político de su época a la plaza pública, convocando permanentemente a las masas. Pero a medida que crecía el movimiento Gaita-

nista se hacían evidentes sus diferencias ideológicas y de intereses con el Partido Liberal, especialmente con los postulados y la forma de hacer política de la clase dirigente del partido.

El ascenso al poder de los conservadores en el 46 contó con un Gaitán en la oposición, lo cual agitó aun más el ambiente político. Pero, al mismo tiempo, el partido de gobierno inició con ánimo revanchista y sectario el desplazamiento de los liberales de los puestos de poder. Inclusive, se producen hechos de sangre, lo que exacerba los ánimos y da comienzo a enfrentamientos bipartidistas que cada vez van ganando en intensidad. La violencia oficial tiende a empeorar el panorama político. En ese momento, Gaitán asume la dirección del partido Liberal, debiendo afrontar la delicada situación de violencia.

Como la violencia recobraba cada vez mayor vigor, Gaitán decide utilizar su arma más poderosa. Es así como a comienzos de febrero de 1948 convoca una gran movilización en Bogotá, conocida con el nombre de la Manifestación del Silencio. La movilización multitudinaria y disciplinada del pueblo confirmó la capacidad de control social y político que Gaitán ejercía sobre las masas. Algunas semanas después de la marcha, el 9 de abril, Gaitán caía asesinado, generándose una gran insurrección que se inició en la Capital, se extendió por todo el país y, sin embargo, fue rápidamente controlada por el gobierno²³. Para entonces la violencia se extiende por todo el territorio nacional. Como lo sostiene Sánchez, "la eliminación del líder no ponía término a la efervescencia social sino que por el contrario la potenciaba. Pero a la postre reveló

22 Catherine LeGrand, *La política y la violencia en Colombia (1946-1965): interpretaciones en la década de los ochenta*. En: Revista *Memoria y Sociedad*, Universidad Javeriana, Bogotá, noviembre de 1997.

23 Existen abundantes estudios sobre Gaitán y el Gaitánismo, de los cuales se destacan, el estudio de Herbert Braun, *Mataron a Gaitán, vida pública y violencia urbana en Colombia*. Editado por la Universidad Nacional de Colombia 1987. Y, Gonzalo Sánchez, *Los Días de la Revolución, Gaitánismo y 9 de abril en provincia*. Editado por el Centro Gaitán, 1983.

también verdades más profundas y más decepcionantes: la identificación personal de todos estos procesos con Gaitán es tal que, una vez aplastada la rebelión subsiguiente al asesinato, la política daba la impresión de regresar a sus causas decimonónicas y deshacerse de todo lo social, tan arduamente construido en la primera mitad del siglo²⁴.

El fracaso de la insurrección popular en abril del 48 y la frustración política que significó la interrupción abrupta del Gaitanismo, unidos a la represión del gobierno conservador y al sectarismo a nivel local en contra de los opositores, ya fueran estos liberales, Gaitanistas o comunistas, generaron en 1949 una agudización de la violencia, especialmente en la sociedad rural.

La represión de los gobiernos conservadores de Ospina Pérez y Laureano Gómez (1946-1953), por su comportamiento político diluyó fácilmente las posibles diferencias entre las acciones de fuerza del Estado y lo que era partidista. En otras palabras, se hizo imposible distinguir cuáles eran las acciones represivas del Estado, y cuáles las propias del proyecto hegemónico y sectario del conservatismo. Un ejemplo fue la utilización de la policía como un instrumento efectivo de persecución y represión contra los opositores al régimen, desatándose un verdadero terrorismo oficial.

El gobierno nacional perdió su capacidad de controlar los desafueros de sus ciudadanos, fueran estos adeptos o no; de esta forma se expandió rápidamente la violencia

por todo el país. Los anteriores factores no sólo hicieron perder legitimidad al Estado institucional, sino que generalizaron la crisis socio-política, contribuyendo así a producir un derrumbe parcial del Estado, como lo sostiene Paul Oquist: "Es el derrumbe parcial del Estado el que explica la simultánea evolución de numerosos conflictos hacia la Violencia. Esta simultaneidad de múltiples luchas físicas, coercitivas, es lo que a la vez explica la intensidad de la Violencia"²⁵.

Pero el fenómeno de violencia también contenía otros elementos además de los expuestos, y que en su momento no era fácil percibir detrás de la confrontación bipartidista: el problema agrario y los conflictos de clase. Los terratenientes aprovecharon con ventajas el desorden causado por la violencia y la ausencia de Estado para imponer sus propios intereses. No en vano se habla de "revancha terrateniente". En muchas regiones del país los campesinos debieron abandonar sus tierras y sus pertenencias para buscar refugio y defender la vida; su "dilema era perecer o resistir". El caso más evidente fue el de los Llanos orientales, hacia donde huyeron miles de familias campesinas en busca de refugio²⁶.

Fue precisamente en el pie de monte llanero donde se conformó el grueso de las guerrillas liberales, las cuales, por su número y organización, se constituyeron en una potencial amenaza para el régimen conservador e incluso para la élite dirigente del mismo partido liberal que había sostenido

24 Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad...* p. 13.

25 En las últimas dos décadas han proliferado los estudios y las publicaciones sobre la Violencia de este periodo. Uno de los estudios más influyente y novedoso y quien planteo por primera vez el "derrumbe parcial del Estado", es el de Paul Oquist, *Violencia, Conflicto y Política en Colombia*, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1978. Para ampliar la bibliografía sobre la Violencia, consultar: Jesús Antonio Bejarano, *Historiografía de la Violencia en Colombia*, En: *Once ensayos Sobre la Violencia*, Bogotá, Fondo Editorial CEREC y Centro Gaitán, 1985. Gonzalo Sánchez G., *Los estudios sobre la violencia. Balance y perspectivas*. En: *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1991. Catherine LeGrand, *La Política y la violencia en Colombia (1946-1965): Interpretaciones en la década de los ochenta*. En: revista *Memoria y sociedad*, Bogotá, Universidad Javeriana, noviembre de 1997.

26 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la violencia en Colombia*, El Áncora editores, Bogotá, 1983. p.p. 29-60

una posición ambigua frente a los campesinos en armas y que ahora veía cómo este movimiento armado de resistencia tomaba sus decisiones con independencia frente al Directorio Liberal de Bogotá.

Para 1953 una suma de factores, entre los que se cuenta el peligro que representaban las guerrillas en los Llanos orientales y en otras regiones del país, el proyecto reaccionario y hegemónico de reforma constitucional planteado por Laureano Gómez y la situación cada vez más incontrolable de violencia, llevó a varios sectores políticos de la clase dirigente a buscar una salida de transición a la crisis. Fue así como en junio de este año el estamento militar comandado por el General Gustavo Rojas Pinilla, asumió el poder. Se puede decir que hasta el momento los militares estaban poco comprometidos en la represión del conflicto interno y a la vez gozaban de alguna credibilidad en los sectores populares, lo que les permitió servir como alternativa para salirle al paso a la profunda crisis social y política en que estaba sumida la nación. "Solución política a la crisis y no dictadura, en el sentido usual del término, la intervención de Rojas fue recibida como un "golpe de opinión"²⁷.

El gobierno militar ofreció una amnistía que permitió la desmovilización y el desarme de las guerrillas de los Llanos y de otras zonas del país. De esta forma se logró parcialmente la paz, y el conflicto disminuyó en intensidad. Sin embargo, el gobierno militar señaló como bandoleros a los pocos reductos armados que no se acogieron a la amnistía y a los grupos comunistas de auto-defensa campesina, con el propósito de exterminarlos por la vía armada. Pero el fracaso militar por reducir estos focos armados y el asesinato de muchos dirigentes guerrilleros amnistiados, contribuyeron a fortalecer en algunas zonas núcleos de insurgentes que, posteriormente, serían la base de la estructuración de las guerrillas de los años sesenta.

Los intentos del gobierno de Rojas Pinilla por crear una base social y política que le facilitara la construcción de un proyecto político autónomo a partir de la creación de una tercera fuerza resultó desafiante para las clases dirigentes de los partidos tradicionales, quienes actuaron rápidamente, conformando un Frente Civil de oposición al gobierno militar. Como era de esperarse, el gobierno de Rojas cae a mediados del 57, siendo suplantado transitoriamente por una Junta Militar que estará en el poder hasta mediados del año 58.

Durante este tiempo, las élites del bipartidismo firman un pacto político por arriba, es decir entre las clases dirigentes de los partidos tradicionales. Este pacto, denominado Frente Nacional, no es más que una coalición bipartidista que ya había sido ensayada en otros momentos históricos de crisis política, con la diferencia de que esta vez, además de acabar con la tendencia hegemónica partidista, se fija un lapso de dieciséis años -que corresponden a cuatro períodos presidenciales de 1958 a 1974- de repartición paritaria del poder entre los dos partidos y, por supuesto, de la burocracia del Estado. El pacto pretende ponerle fin en forma definitiva a las tradicionales confrontaciones violentas entre liberales y conservadores, propósito que se logra. Sin embargo, la medida tendrá un alto costo en lo político, como lo reseñaremos más adelante. Pero mucho más importante que el pacto político resultó el acuerdo entre los gremios empresariales del país sobre el papel que debería desempeñar el Estado en el desarrollo industrializador y en el futuro económico de la nación, es decir, en la consolidación del capitalismo moderno.

EL FRENTE NACIONAL, LAS SUCESIVAS CRISIS Y LA PAZ

La hegemonía bipartidista institucionalizada en el Frente Nacional selló la paz entre

27 ídem, p.41.

liberales y conservadores y los "odios heredados" se desvanecieron en la repartición equitativa de la burocracia. Pero, a pesar de que la violencia había perdido intensidad, aún se estaba lejos de conseguir una paz política completa: reductos de resistencia armada producto de la oposición al pacto, desconfianza mutua entre las autoridades y los insurrectos, utilización por parte de terratenientes o gamonales locales de grupos armados para su provecho o la simple búsqueda de venganza, se fueron transformando en una fase más de la violencia, conocida con el nombre de bandolerismo.

Como lo señalan Meertens y Sánchez, "El bandolerismo no puede ser entendido (...) como un simple residuo de la Violencia, sino como la expresión armada característica de una de sus etapas. (...), es el resultado de las cambiantes relaciones de los alzados en armas con el Estado, los partidos políticos y los detentadores del poder local y regional"²⁸. En gran medida, el bandolerismo fue la expresión de la venganza y del desquite frente al terror oficial y partidista. Este fenómeno social y político se incubó en la segunda mitad de los cincuenta y se prolongó hasta el año 65, cuando fueron controlados y exterminados los últimos grupos de bandoleros.

De otro lado y en forma inconexa con el bandolerismo, en las zonas de influencia comunista, pequeños grupos armados de autodefensas campesinas continuaban resistiendo el acoso militar de las autoridades. Estos grupos serán los núcleos que más tarde conformaran las guerrillas insurreccionales de las FARC.

Como se puede inferir del anterior corolario, la violencia continúa latente, pero no por una terca persistencia sino por las condiciones que permiten la continuidad del

conflicto social y económico. La preocupación de las clases dirigentes por la paz bipartidista y su proyecto social y económico no contemplaban las necesidades ni los intereses de los sectores subalternos de la sociedad, ni las nuevas contradicciones y conflictos surgidos en el marco de las transformaciones introducidas por el desarrollo capitalista. De este modo, seguían presentes los elementos potenciales del conflicto. Es decir, el Frente Nacional no sólo había fallado en la búsqueda de la paz sino también en la introducción de reformas socioeconómicas y en la democratización del régimen político. Como acertadamente lo señala Francisco Leal, "se planteó la solución de una multifacética consecuencia que era la violencia, pero se dejaron de lado los factores de crisis no resueltos totalmente, como el problema agrario, la concentración del ingreso y la estructura oligárquica del poder"²⁹.

En la década de los sesenta el país estaba asistiendo a un proceso dinámico de modernización en muchos aspectos, básicamente, en el agro, la industria y, en general, en la actividad productiva. Pero el pacto bipartidista estaba lejos de modernizar las costumbres políticas. Problemas como el abstencionismo electoral, las viejas y nuevas prácticas clientelistas, con las cuales los políticos de los dos partidos traficaban con los recursos y favores del Estado, la corrupción y la ineficiencia burocrática y, finalmente, la despolitización de la sociedad civil y la desideologización de los partidos tradicionales, pesaron mucho en la democracia y sociedad colombiana en los años ulteriores, e inclusive subsistieron más allá de concluido el Frente Nacional en 1974³⁰. Estos factores contribuyeron a que el Estado institucional colombiano no sólo no saliera de la crisis sino a que esta se agudizara e inclusive se abonara

28 ídem, p.48.

29 Francisco Leal Buitrago, *Estado y política en Colombia*. Siglo XXI editores, CEREC. 2ª. Edición, Bogotá, 1989. p.314.

30 ídem, p.p.318-337.

el terreno para la aparición de nuevos fenómenos desestabilizadores, como sucedería a finales de los setenta y en los ochenta con el surgimiento del narcotráfico.

El aplazamiento de las soluciones a los problemas sociales surgidos en la década de los sesenta y setenta junto con las restricciones del sistema político colombiano, se encargaron de prolongar hasta el presente la crisis del Estado. La obstrucción del sistema a la aparición de alternativas políticas, así estas fueran simplemente disidencias de los partidos tradicionales -como sucedió con el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL o con la Alianza Nacional Popular, Anapo- y mucho menos cuando se trataba de la conformación legal de fuerzas o movimientos de izquierda, impidió la expresión política de muchos colombianos que no se sentían representados por el bipartidismo o que simplemente pretendían crear fuerzas alternas que respondieran a las contradicciones sociales surgidas de los cambios generados por el capitalismo. Incluso si bien es cierto que algunas de estas alternativas políticas de izquierda no comprendieron el país en el cual estaban desarrollando su acción política. Como lo sostiene Francisco Leal, "no sobra indicar que la incapacidad de integración de la nueva izquierda a la realidad nacional se encontró también con las barreras que el régimen oponía defensivamente a cualquier intento de escape del control bipartidista"³¹.

En este ambiente se conformaron y consolidaron en la segunda mitad de los años sesenta algunas de las organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, y el Ejército Popular de Liberación -EPL-. Son precisamente estas tres organizaciones las que aún hoy se encuentran activas.

Es importante reseñar también que en este período y en la década siguiente proli-

feraron los movimientos de izquierda, muchos de los cuales se encontraron atrapados entre la acción política legal y la lucha armada. Sin embargo, una parte apreciable de este movimiento terminó tentado por la lucha armada como la "verdadera y única vía" al cambio revolucionario. Entre muchos otros, sintetizaremos tres factores que alentaban esta decisión. Primero, la experiencia de muchos sectores populares en la lucha guerrillera durante la violencia bipartidista y las sucesivas frustraciones históricas de las vías legales, cuya demostración más patente había sido el asesinato de Gaitán, dirigente que siempre había apelado a la tradición civilista en su brega política. Segundo, la situación internacional, especialmente la latinoamericana, con sus movimientos de liberación y, por supuesto, el éxito armado de la revolución cubana. Y tercero, los espacios cerrados para la participación política y las arbitrariedades represivas del régimen, situación que se prolonga mas allá del Frente Nacional, inclusive hasta nuestros días.

Pero una cosa son las restricciones del régimen y del sistema político colombiano, y otra la posición que asumirán muchos sectores de izquierda que privilegiaron la lucha armada a la oposición legal. Esta última idea fue reforzada por la desconfianza o la poca credibilidad que muchos guerrilleros tenían del cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos después de firmar tratados de paz. Un ejemplo de esta situación se vivió en la primera mitad de la década de los cincuenta, especialmente en los Llanos orientales cuando varios insurgentes desmovilizados cayeron víctimas de las balas oficiales. El caso más relevante fue el asesinato del carismático dirigente guerrillero Guadalupe Salcedo. Esta desconfianza se ha conservado a lo largo del tiempo y es uno de los obstáculos que plantean las organizaciones guerrilleras cuando se inician diálogos de paz, pues con-

31 ídem, p.170

sideran que pierden más guerrilleros en períodos de tregua que de guerra.

Sin que todos los elementos hasta aquí citados justifiquen y legitimen necesariamente la recurrencia de los sectores radicales de las izquierdas a las armas, sí debemos considerar que en Colombia la lucha armada es una tentación permanente cuando se trata de ejercer la práctica política y que aquella, a pesar de los desvíos, conserva un fuerte y evidente nexo político. Son muchas las críticas que se le hacen a la izquierda colombiana por su sectarismo y divisionismo, pero también por repetir los vicios del bipartidismo tradicional, en lo que tiene que ver con su dogmatismo.

Finalmente, es necesario mencionar que las crisis del Estado y la sociedad colombiana, durante y después del Frente Nacional, se hicieron evidentes como consecuencia de dos hechos que desafiaron la aparente estabilidad del régimen: el exitoso Paro Cívico de septiembre de 1977, en el cual el movimiento sindical y los sectores populares pusieron en jaque al gobierno de López Michelsen, y las acciones emprendidas por las guerrillas, especialmente del M-19, durante el cuatrienio siguiente (1978-1982), que develaron la incapacidad del gobierno de Turbay Ayala para hacer efectivas sus medidas de represión, a pesar de haber apelado a todos los instrumentos a su alcance, incluido el desgastado estado de sitio y una feroz represión militar³². Paralelamente a la problemática política, se manifestaron con mayor intensidad los conflictos sociales y económicos, lo que hizo especialmente crítica la situación del país, a lo cual contribuyó también el narcotráfico, diversificándose de esta manera los fenómenos de violencia.

Más preocupante aún que la crisis, resultó la debilidad del Estado para controlar la difícil situación y recuperar su capacidad mediadora en los conflictos. En otras palabras, el tejido social se encontraba roto, fragmentado, y las restricciones a la participación política ligadas a la despolitización social eran tan evidentes, que una solución facilista como la utilización de la fuerza contra los conflictos sociales y la oposición armada, terminó demostrando la debilidad del régimen.

Frente a la crisis y a la confrontación, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) planteó una salida pacífica al conflicto y reconoció las causas objetivas que lo generaban. Su planteamiento contó con cierto apoyo popular y despertó expectativas en muchos sectores sociales y políticos. No obstante, resultaron más poderosos los sectores minoritarios que sabotearon sistemáticamente los procesos de diálogo y paz, y entre los cuales se cuentan las élites socioeconómicas, altos jefes políticos, las fuerzas militares y algunos grupos militaristas de la guerrilla. Es decir, todos pretendían la paz pero de acuerdo a sus propios intereses.

Aunque este segundo ensayo para solucionar la crisis nacional fracasó³³, es importante resaltar el carácter político que el gobierno de Betancur le reconoció al conflicto colombiano, pues no sólo se reactivaron muchos movimientos sociales sino que se dinamizó el proceso de politización de una sociedad fragmentada y resignada al anquilosado y tradicional bipartidismo. Pero además, otro hecho destacado es que, a partir de la administración Betancur, la paz se volvió un tema obligado en las agendas de los polí-

32 Para ampliar, ver: Francisco Leal Buitrago, *Estabilidad macroeconómica e institucional y violencia crónica*, En: *En busca de la estabilidad perdida*, Tercer Mundo Editores, IEPRI y Colciencias, Bogotá, 1995.

33 El planteamiento y concepto sobre segundo ensayo para la solución política del problema de violencia es de Francisco Leal, En: *En busca de la estabilidad perdida*. En este ensayo, se comprende como segundo momento al proceso de paz durante los gobiernos de Betancur y, un tercer momento con Barco. En mi concepto replanteo como un tercer momento el proceso iniciado con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

ticos y de todos los gobiernos hasta el presente. Sin embargo, no fueron pocos los que consideraron que el haber planeado la paz y el diálogo fue lo que finalmente contribuyó al crecimiento de las guerrillas y exigieron perentorias medidas de fuerza y mano dura contra la subversión y todo lo que se le pareciera. Las anteriores circunstancias tendieron a polarizar el conflicto, lo que produjo un recrudecimiento de la violencia, cuya consecuencia ha sido el sostenimiento de la estremecedora cifra de muertos hasta nuestros días.

Un resultado concreto de las negociaciones de paz entre el gobierno de Betancur y la guerrilla de las FARC fue la creación de la Unión Patriótica (U.P.), que contó con el apoyo del Partido Comunista. Posteriormente, este movimiento sería aniquilado por la eliminación sistemática de cerca de dos mil de sus cuadros dirigentes y militantes. En materia de reformas políticas, la elección popular de alcaldes y la descentralización municipal se constituyeron en sus principales logros. Estas reformas influyeron en la nueva dinámica del conflicto, pues la lucha por el poder local se convirtió en un nuevo centro de la confrontación por el dominio territorial. En conclusión, al finalizar en 1986 el gobierno de Betancur no se lograron importantes acuerdos paz y aunque las guerrillas habían ganado militarmente por su crecimiento cuantitativo y asentamiento en muchas zonas, perdieron lo más importante: el prestigio y el protagonismo político ganado unos años antes.

Por otra parte, el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) continuó los procesos de paz y diálogo, bajo el lema de "mano tendida y pulso firme". Pero a diferencia del anterior gobierno, realizó es-

fuerzos por despolitizar la paz, centrandó la acción del Estado en la inversión social en zonas marginadas del desarrollo y en donde estaban acentuados los problemas de violencia y pobreza. Con este propósito impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación -PNR-, que cumplió una función interesante en varias regiones aisladas del país, implantando programas de desarrollo socioeconómico a nivel regional con la participación de las comunidades; también, se estableció una mayor presencia del ejército y la policía en estas zonas. De esta forma, como sostiene Daniel Pécaut, se dio una "Institucionalización" de la negociación del conflicto armado³⁴.

En sus primeros dos años, la administración Barco ensayó la salida de fuerza y los militares ganaron tanto en autonomía para el manejo del orden público como en el incremento de su presupuesto de guerra, a pesar de lo cual no les fue posible controlar a las guerrillas y el conflicto se intensificó. El Estado debió enfrentar además el terrorismo desatado por los carteles del narcotráfico, que demostró su gran poder destabilizador al declararle la guerra no sólo al gobierno sino a la sociedad colombiana. Tal como lo plantea Francisco Leal, "La injerencia del narcotráfico en la progresión de la violencia fue decisiva para dejar al descubierto la debilidad del Estado, pues la impunidad y el desamparo de la justicia se hicieron ostensibles. De esta manera, se redujo más la ya notoria incapacidad estatal de monopolizar el uso de la fuerza"³⁵. No menos preocupante fue el fortalecimiento del paramilitarismo y los escuadrones de la muerte, organizados por los sectores de derecha, narcotraficantes y elementos militares comprometidos no sólo en la eliminación de dirigentes de izquierda, defensores de derechos humanos y periodistas sino tam-

34 Para ampliar el análisis sobre la década de los ochenta, consultar *Daniel Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988*, Siglo XXI editores, Bogotá, 1989. Fundamentalmente en la parte sobre Crisis, Guerra y Paz.

35 *Francisco Leal Buitrago, Estabilidad macroeconómica e institucional...* p.49.

bién de jueces y funcionarios del gobierno³⁶. Los numerosos crímenes execrables contra reconocidos dirigentes políticos y sociales hacían temer por un desenlace aun peor de la violencia, es decir, por la eventualidad de una guerra civil, no en el marco de la polarización sino del caos social en el que se encontraba sumergido el país.

La incapacidad del Estado para garantizarle la vida tanto a los políticos de oposición como a sus propios funcionarios, sumió al gobierno en una profunda crisis que repercutió en el aparato de justicia y en los organismos de seguridad, generándose una impunidad que afectó profundamente el andamiaje de la justicia, su capacidad de mediación a nivel social y la credibilidad del gobierno. En medio de la confusión creada por el incremento de la violencia se fueron posicionando los diversos actores de la violencia. Ante los numerosos frentes del conflicto, el gobierno de Barco da prioridad nuevamente a los tratados de paz con la insurgencia, logrando al final de su mandato la negociación con el diezmando M-19. La firma del acuerdo definitivo de paz y la entrega de armas concluye a comienzos de 1990 y muchos de sus antiguos dirigentes se disponen a participar en la contienda electoral de ese año. Por primera vez una organización armada por fuera del bipartidismo se inserta en forma definitiva en la vida civil, convirtiéndose en movimiento político. Este camino será seguido por otros sectores armados, como el Ejército Popular de Liberación –EPL– que desmovilizó gran parte de sus frentes, y otras organizaciones guerrilleras menores, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, y el movimiento indigenista Quintín Lame. Más adelante, en 1994, también se desmovilizó un pequeño sector del Ejército de Libera-

ción Nacional –ELN– conocido con el nombre de la Corriente de Renovación Socialista –CRS–.

La evidente debilidad del Estado y el colapso de la justicia facilitaron, a comienzos de los 90, la convocatoria a una Reforma Constitucional como salida a la situación de crisis. El nuevo orden constitucional debería permitir el fortalecimiento del Estado, restaurar la legitimidad de las instituciones, garantizar la participación de todos los sectores sociales y políticos, la modernización y consolidación de la democracia participativa, y recuperar el poder judicial y el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Le correspondió a la administración del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) adelantar esta tarea. También el gobierno estaba interesado en profundizar las reformas que le permitieran reasignarle un nuevo papel al Estado en el marco de la internacionalización de la economía y de su modelo neoliberal.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 fue considerada por las organizaciones guerrilleras desmovilizadas y por algunos sectores sociales y políticos como un pacto de convivencia, de ampliación de la democracia y de legitimación del régimen. El gobierno aprovechó estos elementos y el entusiasmo popular despertado por el ambiente reformista, para desarrollar su estrategia de guerra; la “legitimidad recuperada” le permitía la satanización de los sectores que persistían en su lucha armada. A partir de 1992, la declaratoria de “guerra integral” era consecuente con la pretensión del gobierno de debilitar a las guerrillas en varios frentes para obligarlas a negociar; la guerra integral incluía, además de la confrontación militar con los grupos subversivos, el aumento del presu-

36 Durante el cuatrienio de Virgilio Barco, fueron asesinados dos candidatos presidenciales de la Unión Patriótica (UP), Jaime Pardo Leal, y Bernardo Jaramillo; el liberal Luis Carlos Galán; y, Carlos Pizarro el candidato de la Alianza Democrática del recién desmovilizado M-19. Entre los casos más sonados de asesinatos colectivos de funcionarios públicos, fue la masacre de doce miembros de la rama judicial en La Rochela (Santander) en enero de 1989 a manos de paramilitares.

puesto militar para financiar la guerra, mejorar y reestructurar sus organismos de inteligencia, al tiempo que se pretendía arrebatarse a los grupos guerrilleros cualquier pretensión de contenido ideológico y político, todo esto combinado con una importante estrategia de desinformación y confusión adelantada por los medios de comunicación con el fin de desprestigiar el accionar de la subversión. El resultado de nuevo fue una intensificación de la guerra y el incremento de la violencia; al concluir el gobierno Gaviria, las guerrillas persistían, habían rediseñado sus tácticas y la violencia continuaba generando sus muertos.

LA VIOLENCIA ACTUAL: UNA TENDENCIA A LA DEGRADACIÓN DEL CONFLICTO

Después de los agitados procesos de paz de los ochenta y del intento fallido por doblegar a las guerrillas con la "guerra integral" en la primera mitad de los noventa, la confrontación armada ha tendido a exacerbarse. Tanto el gobierno como las guerrillas han canalizado sus esfuerzos hacia el aumento de su capacidad bélica, fortaleciendo los dispositivos militares, incrementando su pie de fuerza y los recursos económicos, y haciendo más eficientes sus estrategias de guerra. El resultado ha sido nefasto para el país, porque además de soportar la guerra irregular, tanto el Estado como la sociedad colombiana se han visto abocados a enfrentar los problemas del narcotráfico y la violencia desorganizada, lo que ha multiplicado los factores que deterioran cada vez más la situación de Derechos Humanos de los colombianos.

Durante el cuatrienio del presidente Ernesto Samper (1994-1998), los avances hacia la paz fueron prácticamente nulos,

pues el presidente dedicó todos sus esfuerzos a sortear la crisis generada por el ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña. Ello obligó al gobierno a concederle favores a la clase política, a los empresarios y a los militares con el fin de mantenerse en el poder. De la misma manera, para evitar las sanciones económicas del gobierno norteamericano, debió empeñarse más a fondo en la lucha contra el narcotráfico y en la erradicación de cultivos ilícitos. Estos factores le restaron capacidad de maniobra para buscar salidas negociadas al conflicto, pues hasta las guerrillas cuestionaron la legitimidad del gobierno; de esta forma, se intensificó la confrontación armada y se fortalecieron nuevos actores de la guerra como el paramilitarismo, lo cual degrada aún más el fenómeno de violencia.

Con Samper, sólo se dieron tímidos pero significativos adelantos en materia de Derechos Humanos, en parte por voluntad del gobierno y en parte por la presión de los efectos que podrían tener las sanciones económicas de la comunidad internacional ante la reiterada violación de éstos en Colombia. A diferencia de gobiernos anteriores, se reconoció que el problema de los Derechos Humanos no era un asunto de mala imagen para el país, sino un problema real; en este sentido se tomaron medidas para humanizar el conflicto interno³⁷. Entre las acciones más importantes que se emprendieron, podemos citar la creación en diciembre de 1994 de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia; en febrero de 1995, el gobierno aceptó la responsabilidad del Estado por acción u omisión sobre los hechos de Trujillo-Valle del Cauca en donde fueron brutalmente asesinadas 107 personas; en febrero de 1996, se incorporó en la legislación colombiana el Protocolo II de Ginebra con el fin de sacar a la población civil del conflicto y de humanizar la guerra; y

37 Juan Gabriel Gómez, *Los Derechos Humanos del nuevo gobierno: entre la imagen y la realidad*. En: Revista *Análisis Político*, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, No. 23 septiembre/diciembre de 1994.

finalmente, por primera vez, se creó un programa dirigido a la población desplazada por la violencia. Lamentablemente, estas medidas no han logrado disminuir ni los horrores del conflicto ni las violaciones permanentes de los Derechos Humanos.

Debido a su continuidad y complejidad, se ha señalado que la violencia en Colombia es endémica. Por sus características y dimensiones, tanto la violencia organizada como la desorganizada han hecho ver la violencia como un fenómeno generalizado en el país. Sin embargo, es necesario puntualizar que la guerra declarada no arroja el mayor número de víctimas al año, pues se ha podido establecer que en la última década el número de muertos por el enfrentamiento armado entre el Estado y la guerrilla se ubica entre un 6 y 7%, mientras que el 85% de los homicidios al año son ocasionados por la violencia desorganizada -delincuencia, arreglos de cuentas, riñas y litigios-. También se ha encontrado que en los lugares en donde existe disputa territorial, o en donde hace presencia más de un actor organizado como guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, los niveles de violencia desorganizada son mayores. Es decir, existe una estrecha relación entre los municipios más violentos y aquellos donde hay una fuerte presencia de los actores organizados³⁸.

La violencia actual se incrementó a partir de 1985, cuando el narcotráfico y sus secuelas se hicieron más evidentes por sus

recursos y procedimientos violentos, consolidándose como un actor más del conflicto; desde entonces, el número de homicidios al año se ha conservado por encima de 25 mil. Pero en los últimos cuatro años un nuevo ingrediente degradó aun más el conflicto colombiano: la expansión y el fortalecimiento del paramilitarismo introdujo como práctica favorita la modalidad de las masacres, diseminando así el terror por varias regiones del país. La aplicación sistemática del terror por parte de los paramilitares se ha hecho siguiendo una estrategia contra-insurgente que pretende "quitarle el agua al pez", pero también se ha realizado por motivaciones estrictamente económicas, cuyo objetivo es defender o incrementar los capitales de terratenientes, narcotraficantes o dirigentes políticos³⁹. Aunque algunos especialistas prefieren denominar a los paramilitares como autodefensas y/o grupos armados privados dedicados a la lucha anti-guerrillera⁴⁰, la verdad es que existe abundante evidencia que demuestra que en su lucha contra-insurgente los paramilitares han contado con la complicidad -por acción u omisión- de efectivos de las Fuerzas Armadas; a este tipo de operaciones se les denomina acciones encubiertas⁴¹. Daniel Pécaut lo explicita muy bien, cuando afirma que "los militares cubren a los paramilitares en los cuales delegan de hecho la función tanto de realizar la mayoría de las masacres de envergadura, como de implantarse territorialmente"⁴². De otro lado, los paramilita-

38 Una estadística importante sobre homicidios en la presente década y su distribución geográfica se encuentra en, Mauricio Rubio P. *De las riñas a la guerra, Hacia una reformulación del diagnóstico de la violencia colombiana*. En: Revista *Coyuntura Social*, FES, FEDESARROLLO, Instituto SER, No. 17, Noviembre 1997. Ver también, Daniel Pécaut, *Presente, pasado y futuro de la violencia*, En: Revista *Análisis Político*, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, No. 30 Ene/abr. 1997, p.p. 3-10.

39 Ver: Amnistía Internacional, *Violencia política en Colombia. Mito y realidad*. Madrid, España, 1994. Y, Americas Watch, *Estado de guerra*, Tercer Mundo editores, IEPRI, Cej, Bogotá, 1994.

40 Mauricio Rubio, *De las riñas a la guerra...* p.81.

41 Existe abundante información sobre la relación entre el paramilitarismo y efectivos de las Fuerzas Armadas. Consultar: Americas Watch, *La violencia Continúa*, 1992. Americas Watch, *Estado de guerra*, 1994. También ver: El informe sobre Colombia de Amnistía Internacional, 1994.

42 Daniel Pécaut, *De la violencia banalizada al terror: el caso colombiano*, En: Revista *Controversia*, segunda etapa, No. 171, Santafé de Bogotá, Dic. 1997.

res no han restringido su actuar a las zonas rurales; también operan en los centros urbanos con asesinatos selectivos, desatando una guerra sucia preferentemente contra los defensores de los Derechos Humanos, activistas por la paz y las organizaciones no gubernamentales que se han atrevido a denunciarlos.

Con el surgimiento del paramilitarismo, en 1985, el terror se difundió rápidamente y las masacres en varias regiones del país se generalizaron. Desde entonces, una de sus principales consecuencias ha sido el desplazamiento forzado de más de un millón de desplazados: tan sólo en 1997 se produjo un éxodo de 257 mil personas, de las cuales el 60% emigró forzosamente por causa de los paramilitares, el 29% por la guerrilla y el 6% por la fuerza pública⁴³. Pero el desplazamiento no sólo está circunscrito a una estrategia político-militar por el dominio territorial, sino que también está ligado a importantes intereses económicos, motivo por el cual, muchas veces la violencia indiscriminada se emprende contra la población inerte, totalmente ajena a la confrontación armada⁴⁴. El desplazamiento que afecta especialmente a la población pobre de la sociedad rural que soporta la guerra, evidencia la incapacidad del Estado para brindarle seguridad a los campesinos, controlar a los actores de la guerra y atender este grave problema social que se acumula en los centros urbanos.

Como conclusión, podemos afirmar que la degradación de la violencia en el último cuatrienio ha estado ligada al incremento de masacres de cuatro o más víctimas.

Esta práctica del terror “tiene como propósito intimidar a la población e impedir cualquier intento de resistencia por parte de las comunidades; busca extender, a un radio de acción sin límites, la definición del adversario”⁴⁵. En 1997 se presentaron 185 masacres, de las cuales los paramilitares cometieron 84%, la guerrilla 14% y el Ejército 2%⁴⁶. Sin dejar de lado las otras violencias ni los otros actores, podemos destacar que las masacres realizadas por los paramilitares han vuelto a revivir en las zonas rurales los actos brutales de la violencia de los años cincuenta. Como sostenía Gonzalo Sánchez en relación a la violencia de mediados del presente siglo: “No tiene igual impacto el asesinato escalonado de 40 personas que una masacre del mismo número de víctimas en una sola operación fulminante y paralizante”⁴⁷. Para Pécaut⁴⁸, la difusión del terror debería acabar con la banalidad de la violencia, pero como afirma más adelante, la crueldad y la brutalidad del conflicto se han vuelto instrumentales y estratégicas para los protagonistas. A lo cual también ha contribuido la prolongación de la violencia, haciéndola prosaica, irracional, sin sentido. Lo extraño es que, a pesar de su degradación, la violencia en Colombia continúa conservado sus nexos con lo político.

Pero 1997 no fue sólo un año de violencia y terror, también se dieron hechos de paz. La convocatoria de diferentes sectores de la sociedad civil —Organizaciones no gubernamentales y algunos movimientos sociales—, agrupados en el Mandato ciudadano por la paz, consiguió en las elecciones de octubre de ese año un hecho sin

43 *Desplazados, una herramienta de guerra*, Periódico, *El Tiempo*, 16 de agosto de 1998, Bogotá. p.8A.

44 Jorge Rojas Rodríguez, *Violencia y desplazamiento: El drama continúa*, En: Revista *Foro*, No. 34 junio de 1998. p. 38.

45 *Revista Cien Días, Especial de Derechos Humanos 1997*, CINEP, Vol. 10, No. 40, Enero-marzo 1998. p. 18-19.

46 ídem, 18.

47 Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad...* p.16.

48 Daniel Pécaut, *De la violencia banalizada al terror...*, p.p. 25-31.

precedentes, 10 millones de votos. Este volumen de votos resulta importante para un país donde la sociedad civil se encuentra profundamente fragmentada y los movimientos sociales son débiles o inexistentes. Debemos reconocer que la convocatoria la realizaron entidades no gubernamentales -ONGs- e individualidades, las denominadas personalidades democráticas. Finalmente podríamos decir que el movimiento por la paz es un importante referente para catalizar lo que piensan los colombianos con respecto al conflicto armado. Al mismo tiempo, a través de la convocatoria se logró un importante golpe de opinión para sensibilizar al país sobre la situación del conflicto y su degradación, pero debemos tener presente que si la sociedad civil no logra resultados concretos que conduzcan a la paz, sería una realidad el temor expresado por Luis Carlos Restrepo, -uno de los impulsores y organizadores del Mandato por la paz-, en el sentido de que los mismos que votaron por la paz podrían caer en el despecho y alentar salidas autoritarias⁴⁹.

Y no es para menos. Los colombianos están cansados de una violencia cada vez más irracional e incomprensible. Pero el fenómeno de la violencia en nuestro país es mucho más que eso. Sin embargo, a pesar del propósito altruista de buscar la paz, el Movimiento por la paz y los medios de comunicación se han encargado de presentarle a la sociedad colombiana una violencia descontextualizada y estéril, que no le dice nada a las mayorías urbanas del país, pero que se les aproxima a través de la televisión y que los afecta en forma de delincuencia organizada y banal. La lectura ahistórica que los medios de comunicación hacen de la violencia actual y su prolongación, ha llevado a olvidar su proceso, sus causas, sus argumentos y motivaciones. La violencia entonces sólo tiene sentido para los que la sufren directamente. En otras palabras, la

violencia se vive en la sociedad rural y sus ecos en los centros urbanos sólo causan mayor malestar y por oposición son muchos los colombianos que pretenden como remedio salidas de fuerza a un mal tan enquistado en la sociedad colombiana que Pécaut describe acertadamente como una guerra civil "larvada".

Podríamos finalizar diciendo que definitivamente existe una prolongación histórica de la incapacidad del Estado para reducir la violencia y para subyugar a algunos actores que la ejercen, para ganar credibilidad en su eficacia de controlarla. Las pocas reformas económicas, políticas y sociales que se han introducido, desde el momento en que se exacerbó la violencia a mediados de los cuarenta, no han sido lo suficientemente profundas e impactantes para que se permita de esta manera recuperar la credibilidad en el sistema político, en el gobierno y en las instituciones que lo representan. Por el contrario, la situación de violencia se disemina, se focaliza, se repite, desaparece y reaparece en muchas regiones, con una frecuencia que desconcierta. Parece que las pacificaciones fueran temporales, y a su vez, al no generalizarse el conflicto, las posibilidades de que se desate una guerra civil se desvanecen, pero paradójicamente también permanecen latentes. De forma continua, los diferentes actores desafían la imaginación y nos ponen de presente que aún no se ha visto todo sobre la violencia. Por eso, ante la incapacidad del Estado para brindar seguridad a sus ciudadanos, controlar a los actores del conflicto y al convertirse él mismo en actor de ese conflicto, se ha vuelto un imperativo humanizar la guerra, sacar o afectar lo mínimo a la población civil, es decir, hacer efectivo el Derecho Internacional Humanitario. Sin ánimo apocalíptico, podemos concluir que aún falta mucho en el camino hacia la paz y la reconciliación entre los colombianos.

49 Luis Carlos Restrepo, *Ecos del Mandato por la Paz*, En: Revista *Foro*, No. 34, junio de 1988. p.45.

OBRAS CONSULTADAS

- AMERICAS WATH (1992). *La violencia continúa. Asesinatos políticos y reforma institucional en Colombia*. Tercer Mundo- IEPRI (Universidad Nacional de Colombia) – CEI. Santa Fe de Bogotá, Enero 1993
- AMERICAS WATH (1994). *Estado de Guerra. La violencia política y contrainsurgencia en Colombia*. Tercer Mundo- IEPRI (Universidad Nacional de Colombia) – CEI. Santa Fe Bogotá, Noviembre 1994
- COMISION DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA (1988). *Colombia: Violencia y Democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno*. Universidad Nacional de Colombia – COLCIENCIAS. Segunda Edición, Bogotá, Abril 1988
- ECHANDIA C., Camilo (1997). *Dimensión regional del homicidio en Colombia*. En: Revista Coyuntura Social, Instituto SER de Investigación – Fedesarrollo, No. 17, Santa Fe Bogotá, Noviembre 1997, pp. 89-103
- JIMENO, Myriam (1998). *Identidad y experiencias cotidianas de violencia*. En: Revista Análisis Político, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, No.33, Santa Fe de Bogotá, Ene.-Abr. 1998, pp. 32-49
- LEAL B., Francisco (1984). *Estado y política en Colombia*. CEREC – Siglo XXI Editores, segunda edición aumentada, Bogotá, 1989
- LEAL B., Francisco (Comp.)(1995). *En busca de la estabilidad perdida*. Tercer Mundo- IEPRI (Universidad Nacional de Colombia)- COLCIENCIAS, Santa Fe de Bogotá, Agosto 1995
- LeGRAND, Catherine (1997). *La política y la violencia en Colombia (1946-1965): interpretaciones en la década de los ochenta*. En: Revista Memoria y Sociedad, Universidad Javeriana, N° 4, Bogotá, 1997, p.p. 79-109
- PÉCAUT, Daniel (1987). *Orden y violencia: Colombia 1930-1054*. CEREC – Siglo XXI Editores, Bogotá Agosto 1987
- PÉCAUT, Daniel (1987). *Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988*. Siglo XXI Editores, segunda edición, Bogotá, 1989.
- PÉCAUT, Daniel (1997). *De la violencia banalizada al terror: el caso colombiano*. En: Revista Controversia, Segunda Etapa No. 171, Santa Fe de Bogotá, 1997, p.p. 9-31
- PÉCAUT, Daniel (1997). *Presente, pasado y futuro de la violencia*. En: Revista Análisis Político, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, No. 30, Santa Fe de Bogotá Ene.-Abr 1990, pp. 3-36
- RUBIO P., Mauricio (1997). *De las riñas a la guerra. Hacia una reformulación del diagnóstico*. En: Revista Coyuntura Social, Instituto SER de Investigación – Fedesarrollo, No. 17, Santa Fe de Bogotá, Noviembre 1997, pp. 69-87
- SANCHEZ G., Gonzalo (1990). *Guerra y Política en la sociedad colombiana*. En: Revista Análisis Político, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, No. 11, Sept.-dic. Bogotá, 1990, pp. 7-27
- SANCHEZ G., Gonzalo y MEERTENS, Donny (1983). *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*. El áncora editores, Bogotá, 1983
- SANCHEZ G., Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo (Comp.)(1986). *Pasado y Presente de la Violencia en Colombia*. CEREC, 2 edición aumentada, Bogotá Sept. 1991
- WALDMANN, Peter (1997). *Cotidianización de la violencia: el ejemplo de Colombia*. En: Revista Análisis Político, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, No. 32, Santa Fe de Bogotá, Sept.-dic. 1997, pp. 34-45
- WALDMANN, Peter (1993). *La insospechada fecundidad de la violencia*. En: Revista Colombiana de Psicología, Depto. de Psicología-Universidad Nacional de Colombia, No. 2, Santa Fe de Bogotá, 1993, pp. 101-105

